

Análisis del Informe Ejecutivo Integral – Caso CORELCA y lineamientos para atención institucional

I. Contexto general

Se recibió para consideración del Grupo de Asuntos Legislativos el “Informe Ejecutivo Integral – Caso CORELCA”, a interés de los ex trabajadores de la extinta Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica – CORELCA.

El documento plantea la existencia de un daño antijurídico derivado de los procesos de reestructuración del sector eléctrico y propone la adopción de una decisión administrativa de cierre institucional, orientada a la reparación integral de los trabajadores afectados.

En ese contexto, resulta necesario analizar el alcance de las pretensiones planteadas, identificar el rol institucional del Ministerio de Minas y Energía y definir una ruta de atención que sea jurídicamente adecuada, respetuosa del marco competencial y alineada con los principios de coordinación interinstitucional.

II. Síntesis del Informe

- Las desvinculaciones masivas de trabajadores de CORELCA habrían sido contrarias al ordenamiento jurídico, en particular por la ausencia de autorización administrativa para despidos colectivos y por la afectación de derechos laborales adquiridos.
- Existe un daño antijurídico de carácter estructural y continuado, imputable al Estado colombiano.
- Dicho daño no ha sido reparado materialmente, pese a la existencia de una providencia del Consejo de Estado (2016) y de actos administrativos vigentes (Resoluciones 0036 y 1919 de 2017 del Ministerio del Trabajo).
- El caso ha trascendido al ámbito internacional (CIDH), lo que incrementa el riesgo de responsabilidad del Estado.

- Se propone la adopción de un Plan Especial de Reparación Pensional y Laboral como mecanismo de cierre definitivo.

III. Rol del Ministerio de Minas y Energía

De conformidad con el marco constitucional y administrativo, el Ministerio de Minas y Energía, en su condición de cabeza del sector, tiene un interés institucional en el asunto; sin embargo, su actuación debe enmarcarse estrictamente dentro de sus competencias.

En ese sentido, es importante precisar que el Ministerio no es la autoridad competente para reconocer directamente derechos laborales individuales ni para resolver controversias judiciales. Tampoco le corresponde sustituir a otras entidades con competencias específicas en materia laboral, presupuestal o de defensa jurídica del Estado.

No obstante, el Ministerio sí tiene un rol relevante en términos de participación en escenarios de coordinación interinstitucional, aporte de información sectorial y antecedentes del proceso de reestructuración y contribución técnica en la evaluación de alternativas de política pública relacionadas con el sector.

En consecuencia, su actuación debe orientarse a facilitar la articulación institucional, sin asumir decisiones que excedan su marco funcional.

IV. Necesidad de articulación interinstitucional

El asunto planteado trasciende la órbita de una sola entidad y compromete competencias de múltiples actores estatales, entre ellos Ministerio del Trabajo, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Presidencia de la República y Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE).

En particular, la participación de la ANDJE resulta relevante para evaluar los riesgos litigiosos, tanto en sede interna como internacional, analizar la situación del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y definir una estrategia de

defensa coherente con eventuales escenarios de solución administrativa o amistosa.

V. Importancia de análisis de casos individuales

Si bien el informe plantea una problemática de carácter estructural, cualquier alternativa de solución requiere un análisis individualizado de los potenciales beneficiarios.

Este análisis es fundamental para poder verificar la existencia y condiciones de los vínculos laborales, determinar la situación jurídica particular de cada trabajador, establecer la procedencia de eventuales medidas de reparación y garantizar la sostenibilidad fiscal y la seguridad jurídica de cualquier decisión.

VI. Pagos y litigios asociados

De acuerdo con la información contenida en el Formato Único de Inventario Documental (FUI) que reposa en el Ministerio, de procesos relacionados con CORELCA, se evidencia la existencia de un número significativo de procesos judiciales y administrativos, así como erogaciones asociadas al cumplimiento de obligaciones laborales derivadas de dichos litigios (511).

La revisión del documento permite identificar que el Ministerio ya ha asumido cargas económicas relevantes por concepto de condenas, conciliaciones y pagos asociados a reclamaciones laborales individuales, lo cual demuestra que el asunto no es hipotético ni eventual, sino que ha tenido impactos fiscales concretos.

No obstante, la información también refleja dispersión en los casos, diversidad de situaciones jurídicas y ausencia de un cierre integral, lo que refuerza la necesidad de un diagnóstico consolidado y validado institucionalmente, evitando duplicidades o reconocimientos indebidos y garantizando cualquier medida futura se adopte con base en la verificación individual de los casos.

VII. Conclusión

El caso CORELCA plantea una problemática compleja que ha generado impactos jurídicos y fiscales concretos para el Estado, evidenciados en la existencia de múltiples procesos y pagos asociados a obligaciones laborales ya reconocidas. En ese sentido, cualquier aproximación institucional debe partir de este contexto real, evitando tanto la inacción como la adopción de decisiones que desborden el marco competencial.

En consecuencia, la actuación del Ministerio debe orientarse a facilitar una respuesta estructurada del Estado, sin asumir competencias que corresponden a otras entidades, pero asegurando que el proceso avance hacia una definición institucional ordenada, sostenible y respetuosa del marco constitucional y legal vigente.